

**Expediente: 2C/2C.11/RR/05/2024**
**SAC/O/151/2024**
**Página 1 de 4**
**ASUNTO: Se resuelve recurso de revocación que confirma el acto recurrido.**  
**Xalapa-Equez., Ver., a 07 de mayo de 2024**
**Domicilio para oír y recibir notificaciones:**

 \_\_\_\_\_, número \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_ Veracruz.

VISTO el expediente en que se actúa, se desprende que la ciudadana \_\_\_\_\_ Castillo promovió RECURSO DE REVOCACIÓN por su propio derecho, señalando como acto impugnado el emitido por la Oficina de Hacienda del Estado, con sede en Acayucan, Veracruz, el cual se describe a continuación:

Documento	Folio/clave	Fecha	Importe	Emisora
Mandamiento de Ejecución	ACY/JUD/004/2023	27/11/2023	\$11,357.40	Oficina de Hacienda del Estado, con sede en Acayucan, Veracruz (autoridad ejecutora)

Por lo que estando lista para resolver esta instancia administrativa, se procede a dictar la presente al tenor de los resultandos y las consideraciones que se exponen en lo sucesivo.

### Resultandos

**A) El ocho de enero de dos mil veinticuatro se recibió en la Oficina de Hacienda del Estado, con sede en Acayucan, Veracruz, el escrito recursal antes descrito, el cual se remitió y se recibió el nueve de febrero del mismo año en la Procuraduría Fiscal, para el trámite de Ley, radicándose con el número de expediente 2C/2C.11/RR/05/2024.**

**B) Habiendo estimado procedente el medio de impugnación y en virtud de que se cuenta con la documentación necesaria para conocer este asunto, se concluye que el expediente relativo al recurso de revocación está debidamente integrado y listo para resolverse.**

### Considerandos

**PRIMERO.** En la estructura orgánica de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, esta Subsecretaría de Ingresos es la superior en jerarquía de la autoridad administrativa de la cual emana el acto recurrido con antelación, además de contar con atribuciones para actuar en todo el territorio de esta entidad federativa, por lo cual resulta competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación administrativo en términos de lo establecido en los artículos 9 fracción III y último párrafo, 10 y 11, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 20 párrafo primero inciso c) y segundo, del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 262, 273, 274 y 275 fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1 fracción XVII, 4, 10, 12 fracción II, 19 fracción IV, 20 fracciones VIII y LXXII y 21, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

**SEGUNDO.** La existencia del acto administrativo recurrido se encuentre acreditada con la correlativa prueba documental de la parte recurrente, misma que coincide con lo informado a su vez por la Oficina de Hacienda a la cual se atribuyó.

**TERCERO.** Fue oportuna la interposición del medio de defensa que se atiende, toda vez que el acto recurrido se notificó el ocho de diciembre de dos mil veintitrés, por lo que el plazo legal para tal fin venció el veintitrés de enero de dos mil veinticuatro, mientras que el Recurso de Revocación se presentó el ocho de enero de dos mil veinticuatro y, entonces, es dable concluir que se cumplió con lo previsto por el artículo 261 del Código de la materia.

Se eliminó 10 palabras, 02 firmas y 02 conjuntos afanuméricos por contener datos personales de personas físicas, de conformidad con el artículo 2 fracción V, 3 fracción IX y X, 78 fracción I de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 67 de la Ley 250 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Lineamiento Trigésimo Octavo Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información





Inobservado en su configuración aspectos formales, para declarar su nulidad es condición indispensable que la irregularidad aduce trascienda a la esfera de derechos del particular, dejándolo sin defensa, lo que doctrinalmente se conoce como la "teoría de las ilegalidades no invocantes". Ahora, para determinar esa trascendencia, los Incisos mencionados prevén de manera enunciativa, hipótesis en los cuales, a pesar de existir vicios, el acto no debe invalidarse, las cuales tienen como denominador común que se infringió una formalidad regulada en la norma, pero ésta se convalidó, por ejemplo, al existir constancia fehaciente de que el particular, de cualquier manera, tuvo conocimiento de la comunicación que se le dirige o porque la información o le prueba allegada no sea la idónea para sustentar la decisión de la autoridad administrativa. Por tanto, si en el juicio contencioso administrativo federal se hacen valer violaciones de índole formal, no procede declarar la nulidad del acto administrativo impugnado, cuando no tengan perjuicio jurídico alguno al particular, por haberse subsanado o convalidado.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 505/2017. MRCI del Bajío, S.A. de C.V. 31 de octubre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Edgar Martín Gasca de la Peña.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de abril de 2018 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Consideraciones anteriores por las cuales se considera que no asiste la razón a la recurrente para revocar el acto recurrido.

II. La recurrente en su agravio segundo, señala que el mandamiento de ejecución que se le pretende ejecutar es ilegal, ya que la multa que se pretendió cobrar de ninguna forma tiene el carácter de aprovechamiento, por lo que la Oficina de Hacienda carece de facultades para cobrar o requerir el pago de una multa impuesta por un juez, además de que invoca el artículo 129, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual señala que las multas impuestas por jueces formarán parte del fondo auxiliar para la impartición de justicia.

Los argumentos en los que controvierte la naturaleza jurídica de la multa impuesta por la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Poder Judicial del Estado de Veracruz, que intentó hacer efectiva la autoridad exactora, son **inoperantes** pues el tema planteado ya está definido por nuestro Máximo Tribunal, mediante la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 50/2003, en la que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación, son aprovechamientos que constituyen un crédito fiscal, la cual expresamente señala lo siguiente:

Registro digital: 184085  
Instancia: Segunda Sala  
Novena Época  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 50/2003  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Torno XVII, Junio de 2003, página 252  
Tipo: Jurisprudencia

**MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SON APROVECHAMIENTOS QUE CONSTITUYEN UN CRÉDITO FISCAL. Las multas que impone el Poder Judicial de la Federación pertenecen al rubro de aprovechamientos federales, según lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, ya que constituyen ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de los que obtiene por contribuciones o ingresos derivados de financiamientos y de los que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, lo que se corrobora por el hecho de que dentro de la clasificación que el artículo 2o. del propio Código hace de las contribuciones en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, no están comprendidas aquellas multas, ni tampoco como accesorios de las contribuciones, ya que su imposición no tiene origen en el ejercicio de la potestad tributaria, sino en facultades administrativas y sancionatorias, establecidas legalmente por la inobservancia, violación o abuso de deberes relacionados con el acceso, procuración y administración de justicia, a cargo de los gobernados y de las autoridades. En ese sentido, estrictamente deben considerarse como multas no fiscales, pero que dan lugar a un crédito fiscal, pues los créditos fiscales que el Estado o sus organismos descentralizados tienen derecho a percibir, pueden provenir, entre otros rubros, de los aprovechamientos, según lo señala el numeral 4o. de dicho Código; por tanto, si las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación tienen carácter de aprovechamientos, es inconstitucional que, determinadas en cantidad líquida, constituyen un crédito fiscal y el Estado está facultado para proceder a su cobro, inclusive a través del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el capítulo tercero del título quinto del referido Código.**

En efecto, como se observa del criterio inserto con anterioridad, las multas que impone el Poder Judicial de la Federación tienen el carácter de **multas no fiscales** al provenir de la función jurisdiccional, que constituyen **ingresos** que tiene derecho a percibir el Estado por funciones de derecho público como **aprovechamientos**, inclusive a través del procedimiento administrativo de

ejecución, lo cual, aplicado de forma análoga al ámbito local, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave tiene el derecho a percibir los ingresos provenientes de las multas impuestas por el Poder Judicial como aprovechamientos, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en términos de los artículos 72 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 19 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En virtud de lo anterior, la autoridad exactora cumplió todos los extremos del artículo 7 del Código de la materia, por lo que se declara que no existen causas que afecten la validez de los actos realizados por la exactora.

En consecuencia, es innegable que con sus argumentos la parte recurrente no desvirtuó los fundamentos y motivos del acto administrativo controvertido en esta vía del recurso de revocación, previsto por el artículo 260, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, razón por la cual procede su confirmación.

Por lo expuesto y razonado con antelación es de resolverse y se:

### Resuelve

- I. Se **CONFIRMA** el acto recurrido, identificado en la tabla inicial de esta resolución.
- II. Se instruye a la respectiva Oficina de Hacienda del Estado, con sede en Acayucan, Veracruz, que de encontrarse pendiente de pago y no haber recibido instrucción distinta o en contrario por parte de la ordenadora u otra autoridad jurisdiccional, continúe con el procedimiento administrativo de ejecución iniciado.
- III. Notifíquese a la recurrente esta decisión, teniendo en cuenta que, de conformidad con los artículos 277 y 292, párrafo primero, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en contra de esta resolución procede el Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, para lo cual cuente con quince días hábiles posteriores a aquél en que surta efectos su notificación o tenga conocimiento de la misma.

Cúmplase.

Atentamente

Lic. Diego David Meléndez Bravo  
Subsecretario de Ingresos

MSBM/MyME/SIN/IG